



La nueva política en el Chile postdictatorial: ¿Pasividad ciudadana o clientelismo desde abajo? (1990-1996)^a

*A nova política no Chile pós-ditatorial:
Passividade cidadã ou clientelismo popular? (1990-1996)*

*The new politics in the post-dictatorship Chile:
Passivity Citizen or clientelism from below? (1990-1996)*

Rolando Alvarez Vallejos^b

Resumen: En Chile, los gobiernos posteriores a la dictadura militar de Pinochet, han sido evaluados por lo general desde la óptica político-institucional e interpretados preferentemente como producto de la “ingeniería política” ejecutada por los líderes políticos de la gobernante coalición de centroizquierda, la derecha política y los llamados “poderes fácticos”. El presente artículo indaga sobre el papel que la ciudadanía chilena tuvo en la configuración de la política postdictatorial. Lejos de permanecer inactiva o como mera observadora de los acontecimientos que el país vivía, sus demandas y preocupaciones coadyuvaron a reconfigurar la política chilena. Esto se comenzó a reflejar en los órganos de poder local, como los municipios, que se convirtieron en el referente de poder más cercano a la gente. Fue en ellos donde surgió y se fomentó la “nueva política chilena”, despolitizada y pragmática.

Palabras clave: Transición democrática. Municipios. Clientelismo. Chile.

Resumo: Os governos posteriores a ditadura militar de Pinochet, no Chile, foram avaliados política e institucionalmente como produtos da “engenharia política” de líderes das coalizões de centro-esquerda, da direita política e dos chamados “poderes factuais”. O presente artigo indaga sobre o papel que a cidadania chilena exerceu na configuração dessa política pós-ditatorial. Consideramos que as demandas e preocupações dos cidadãos, longe de permanecerem inativas ou como meras observadoras dos acontecimentos vividos no país, foram fundamentais para

^a Este artículo es parte del Proyecto Fondecyt n° 1110060, dirigido por el autor. Se agradece la colaboración al equipo de investigación del proyecto, Licenciados en Historia Fernando Pairican, Felipe Seguel y Juan Pablo Acevedo.

^b Dr. en Historia, académico Universidad de Santiago de Chile. <rolando.alvarez@usach.cl>.

a reconfiguração da política chilena. Esta importância se expressou em órgãos de poder local, como os municípios, que se converteram na instância de poder mais próxima da população. Entendemos que a “nova política chilena”, vista aqui como despolitizada e pragmática, surgiu e foi fomentada a partir dos municípios.

Palavras-chave: Transição democrática. Municípios. Clientelismo. Chile.

Abstract: In Chile, the governments that followed Pinochet’s military dictatorship have generally been analyzed from a political-institutional perspective and mostly interpreted as a product of “political engineering” carried out by the leaders of the center-left coalition, the political right and the so called *poderes fácticos* (de facto powers). This article explores the role of the Chilean citizenry in the configuration of post dictatorship politics. It argues that far from remaining passive or mere observers of the events that were unfolding in the country, citizens expressed demands and concerns that contributed to the re-shaping of Chilean politics. This process began at the local level like the Municipalities, where people saw the clearest access to power. It was there that the “new Chilean politics”, depoliticized and pragmatic, was born and encouraged.

Keywords: Democratic transition. Municipalities. Clientelism. Chile.

El año 2011 marcó un hito en la historia reciente de Chile, pues las masivas movilizaciones estudiantiles pusieron en tela de juicio algunos de los supuestos básicos existentes sobre las últimas décadas del país, especialmente desde el retorno a la democracia en 1990. Proceso corrientemente caracterizado como “modelo” por el consenso político, económico y social que le habría dado forma, a la luz de los acontecimientos de los últimos años, parece necesario repensar estos conceptos. ¿Algo cambió en la conciencia ciudadana de los chilenos y chilenas respecto a las décadas pasadas?, ¿cuál es la raíz de este aparentemente nuevo “poder ciudadano”? Este artículo se plantea estas problemáticas, analizando la relación, a nivel comunal, del sistema político con la ciudadanía durante los primeros años del Chile postdictatorial.

Los gobiernos postdictatoriales en Chile han sido evaluados desde diversos puntos de vista. Algunos han destacado los supuestos logros del “Modelo Chileno”, tanto por las reformas al modelo económico, que impedirían denominar neoliberal a sus políticas económicas, como por la progresiva consolidación de la institucionalidad democrática en los noventa (Muñoz, 2007; Huneus, 2000). Desde otra perspectiva, se han cuestionado estos planteamientos, resaltando la continuidad de la herencia de la dictadura de Pinochet en materias políticas, económicas

y sociales, lo que impediría hablar de la existencia de una verdadera democracia en Chile (Drake/Jaksic, 1998; Portales, 2000; Garretón, 2007). Esto se habría visto reflejado en los magros resultados del desarrollo de la ciudadanía a nivel local, reducida a ser ejecutores de las políticas decididas por instancias superiores (De la Maza, 2009; Águila, 2006; Guerra, 1997). En este sentido, se argumentó que el individualismo y la sociedad de consumo, generado estructuralmente por el modelo económico desplegado por los gobiernos postdictatoriales, incentivaba la despoliticización, corroyendo las antiguas tradiciones colectivas que habían caracterizado a la cultura política chilena hasta 1973 (Campero, 1988; Lechner, 2002; Castillo, 2002). Esto habría generado lo que se denominó como la des-ciudadanización de la política, en referencia a la creciente tecnocratización del quehacer público, promovido por los propios gobiernos de la Concertación. Este proceso habría favorecido a la derecha, permitiendo el aumento de su influencia política y electoral (Joignant, 2003; Moulian, 1997, 1998; Gómez, 2010). Esto habría dado paso en Chile a lo que se denominó como la “política analfabeta”, caracterizada por su apoliticismo, carencia de ideologías y programas, lo que la volvía funcional al orden dominante y debilitaba la vida democrática del país (Moulian, 2004). Respecto al papel de los gobiernos locales en la restaurada democracia chilena, se ha insistido que mantuvieron las características asignadas durante la dictadura, cuando fueron convertidos en la herramienta para reproducir el neoliberalismo en la base social (Valdivia, 2012). Así, el clientelismo político implementado en los años ochenta, heredero a su vez del existente previo al golpe de estado de 1973, continuó desarrollándose (Barozet, 2003; Valenzuela, 1989). Dotados de numerosas atribuciones administrativas, los alcaldes concentraron el proceso de toma de decisiones, desalentando la existencia de gobiernos comunales participativos y realmente descentralizados (Raczinsky/Serrano, 1987, 1988; Pozo, 1989).

Respecto al concepto de clientelismo, este ha sido definido de distintas maneras: que surge en países con escaso desarrollo institucional y democrático, o que es parte constituyente de la institucionalidad democrática moderna; como propio de gobiernos estatistas, pero también existente en regímenes neoliberales (Combes, 2011). Por otra parte, se ha propuesto repensarlo, planteando la existencia de un “clientelismo desde abajo”, basado en la historia social británica. Desde esta óptica, las élites dominantes, para perpetuar su dominación, están obligadas a negociar con los subalternos, descartando la pasividad total de estos (Banégas, 2011).

Dentro de este marco de discusión, la hipótesis que atraviesa a este artículo pretende matizar aquellos planteamientos que describen los primeros años del retorno a la democracia en Chile como un proceso solo definido desde la “alta ingeniería política” o que la ciudadanía careció de influencia en el desenvolvimiento del proceso político de la época. Desde nuestro punto de vista, durante la década de los años noventa, las necesidades y exigencias de la ciudadanía influyeron en la configuración de las características del tipo de liderazgo que se desarrolló en los órganos de poder local. Las relaciones clientelares entre los alcaldes y sus respectivas comunidades, hizo que se tomaran en cuenta las demandas “desde abajo”, las que privilegiaron un perfil de gestión comunal pragmática, alejada de los liderazgos político-ideológico tradicionales. Esto se vio reflejado en la evolución electoral y discursiva entre la primera elección municipal (1992) y la que la prosiguió (1996), en donde se fortaleció progresivamente la dimensión “apolítica” y ejecutiva-gerencial de los candidatos a alcaldes. Medidas contra la delincuencia, eficiencia en la gestión y la solución de problemas concretos, fueron los principales tópicos que configuraron la política municipal, que por su importancia ciudadana, terminó por trasladarse a nivel nacional.

1 Ciudadanía y subjetividad en el Chile de la Transición Democrática

El Informe Anual de Desarrollo Humano en Chile del año 1996 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concluía que a pesar de los significativos logros en los indicadores sociales del país, su principal característica socio-económica era la desigualdad social, lo que hacía urgente mejorar los procesos de integración. En este marco, continuaba el informe, la ciudadanía era consciente de estas desigualdades, lo que se traducía en una mirada crítica sobre el sistema político y exigía nuevos liderazgos políticos, alejado de prácticas tradicionales (PNUD, 1996, p. 19). Al año siguiente, la notable baja en la participación y número de inscritos para votar en las elecciones parlamentarias, demostraban el creciente desencanto hacia la clase política. En 1998, un nuevo informe del PNUD, ratificaba las conclusiones de 1996, reafirmando que a pesar de los avances en materias de salud, educación y vivienda, entre otros indicadores sociales, la ciudadanía incubaba un profundo malestar y descontento por sus condiciones de vida (Riquelme, 1998; PNUD, 1998).

Estas conclusiones para muchos constituyeron una sorpresa, en el contexto de un país que mostraba buenos indicadores sociales y económicos. Desde el punto de vista estructural, a principios de la década de los noventa, en Chile se estableció un modelo hegemónico – heredado de la dictadura de Pinochet – que ha sido denominado como una “sociedad neoliberal triunfante”, en donde muchos de los principios constituyentes del modelo neoliberal se habían naturalizado. Uno de sus manifestaciones más destacadas fue la irrupción de la sociedad de consumo, que generó profundos cambios culturales en los habitantes del país, acordes a pautas de comportamientos individualistas y consumistas (Moulian, 1997; Gómez, 2010, p. 352).

Tal como se ha señalado, este “sujeto neoliberal” fue quien dio vida al Chile postdictadura y sus preocupaciones determinaron algunas de las características del recién restaurado sistema democrático. Nuevos tópicos aparecían como ejes de interés de las personas. En una encuesta realizada a mediados de 1991 por un centro ligado a la coalición de gobierno, se establecía que los principales problemas que interesaban a la población eran la salud (59%), el empleo (37,9%) y la pobreza (29,3%). Los derechos humanos aparecían en los últimos lugares, con el 11,4% (Gómez, 2010; La Segunda, 24 de junio de 1991, p. 12). Con el tiempo, estas inclinaciones se confirmaron, dando cuenta de las nuevas preocupaciones de la población.

Desde los primeros años del gobierno de Aylwin, tres temáticas “sociales” coparon la agenda política del país: el combate contra la pobreza, la seguridad ciudadana y los primeros casos de corrupción, que surgieron con particular fuerza a nivel de los municipios, los órganos de poder local más importante del país. Como se ha señalado, la estrategia de la Concertación para reducir la pobreza, tuvo un impacto acelerado, registrándose un rápido descenso en pocos años (Meller, 1998). Por este motivo, si bien la pobreza siempre fue sindicada como una de las prioridades de la población, fue una materia que, en alguna medida, encontró respuestas en la autoridad central. Sin embargo, la nueva autoridad no mostró la misma capacidad frente a la delincuencia y la corrupción.

La delincuencia (y la violencia política de grupos de izquierda en los primeros tres años de la transición), se convirtió en uno de los aspectos centrales del debate político de principios de la década de los noventa. El gobierno de Aylwin (1990-1994) tenía como una de sus principales tareas recuperar la convivencia democrática en el país, tras largos años de autoritarismo y represión política. La bandera de la defensa de los derechos humanos había sido uno de los pilares éticos en torno al que se

construyó el relato épico democratizador que encarnaba la coalición de partidos aglutinados en la Concertación de Partidos por la Democracia. Por este motivo, la irrupción del fenómeno de la delincuencia común como un problema social urgente, sacó de su libreto al nuevo gobierno. La alternativa represiva, al menos para las autoridades democráticas, resultaba incómoda y políticamente incorrecta.

En el caso de la violencia de izquierda, tras el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), el gobierno creó la llamada “Oficina de Seguridad Pública”. Compuesta por militantes de izquierda, captó a una vasta red de ex militantes de grupos armados, lo que le permitió desarticular a los grupos armados de izquierda con un costo humano considerado bajo. De esta manera, se dio la paradoja que los gobiernos democráticos pudieron mostrar éxitos en una materia en el que la dictadura había pagado altos costos de imagen pública. Sin embargo, igualmente vieron carcomerse su prestigio a manos de la temática de la seguridad pública. Así, la oposición de derecha encontró uno de los principales nichos políticos desde donde golpear a los gobiernos postdictatoriales. Con el asesinato del senador Jaime Guzmán, la derecha logró convertir el tema de la seguridad ciudadana en una materia casi propia y ganó autoridad moral para referirse a ella.

En este sentido, es necesario aclarar el tema sobre el uso político de la delincuencia. La derecha y sus medios de prensa afines orquestaron una verdadera campaña comunicacional para desprestigiar al gobierno. En este sentido, la creación de la fundación “Paz Ciudadana”, por obra de Agustín Edwards, connotado empresario de las comunicaciones e influyente hombre de la derecha chilena, marcó un hito. Constituida como respuesta al secuestro de su hijo por parte del FPMR, le dio legitimidad a sus planteamientos alarmistas, pues en su directorio integró a partidarios del nuevo gobierno democrático (Otano, 1995, p. 210). Por su parte, investigaciones realizadas por centros cercanos al nuevo gobierno democrático a principios de la década de los noventa, establecían el aumento absoluto de la delincuencia en la ciudad de Santiago, principal núcleo urbano del país (Oviedo, 1993, p. 186).

De esta manera, la oposición de derecha utilizó esta problemática para magnificar sus alcances y presentarlo como un problema supuestamente nuevo, del cual sería responsable el gobierno del presidente Aylwin. Con todo, sin desconocer la variable de manipulación política de la delincuencia, lo que nos interesa resaltar es que, más allá del debate de si realmente había o no aumentado la delincuencia, la población, desde

el punto de vista subjetivo, sí lo comenzó a identificar como uno de sus principales problemas cotidianos.

El alcalde de derecha Iván Moreira fue de los primeros en instalar el tema de la seguridad ciudadana, denunciando la inoperancia del gobierno. Así, al hacerse carne de la sensibilidad de la población, inauguró una importante veta de la labor de los alcaldes. En efecto, estos, tal como lo comenzó a hacer Moreira, principiaron a preocuparse por la “seguridad ciudadana” (*La Tercera*, 12 de agosto de 1991). Tal como lo revelarían encuestas posteriores, la ciudadanía culpaba al gobierno central por el “clima de inseguridad”, eximiendo a los alcaldes. Por este motivo, si los ediles se volcaban exitosamente a tomar medidas en esta sensible materia, podrían captar un importante capital político. Así, a pesar de ser una bandera que enarboló la derecha, los alcaldes designados por Aylwin no se quedaron atrás con medidas destinadas a “derrotar a la delincuencia”, de acuerdo a la frase cliché de la época. Es más, el principal referente edilicio de la Concertación, el alcalde de Santiago Jaime Ravinet, no dudó en liderar esta opción, declarando a fines de 1991 que su comuna “tendrá vigilancia policial las 24 horas del día” (*La Tercera*, 8 de diciembre de 1991).

De esta manera, los alcaldes que supieron manejar con habilidad el tema de la seguridad ciudadana, aparecieron como una alternativa a la “clase política”, visualizada lejana de los “verdaderos” problemas de la gente. En el fondo, el costo de la existencia de la delincuencia lo pagaban los políticos tradicionales. El discurso autoritario para combatirla, inviable para el gobierno, fue tomado por algunos liderazgos edilicios. Acompañándolo de una mirada supuestamente “desideologizada”, en el sentido de ruptura con las disputas político-partidistas, lograron una gran sintonía con la población.

El año 1993 fue particularmente difícil para el gobierno en materia de seguridad. Año de elecciones presidenciales, fue usado como parte de la artillería con que la oposición podía atacar al gobierno. En aquel período comenzó a imponerse el estilo “cercano” a la gente, implementado especialmente por Joaquín Lavín en la comuna de Las Condes. Este se caracterizó por tomar medidas “novedosas”, como subsidios de autoprotección policial, guardias municipales móviles, fiscalía anti-delincuencia, cierre de pasajes, elevar rejas y panderetas, entre otras. Por su parte, Ravinet también tomaba iniciativas contra la delincuencia (*El Mercurio*, 18 de enero de 1993, cuerpo C, p. 1). El gobierno, por su lado, a pesar de anuncios de combate a la delincuencia, se veía errático en esta materia, sin medidas visibles, con lo que los alcaldes aparecían como

los verdaderamente conectados con los problemas de los ciudadanos comunes y corrientes (*La Época*, 10 de marzo de 1993, p. 15). De esta manera, los alcaldes que consiguieron mayor rendimiento político a la delincuencia, se posicionaron ante ella desde tres puntos de vista: ubicándolo como tema prioritario; que reivindicaron la “mano dura”, frente a la supuesta “mano blanda” de la autoridad y de los tribunales de justicia y, por último, que supieron tomar medidas efectistas, que las personas podían visualizar como algo concreto contra este flagelo (*La Tercera*, 23 de julio de 1993, p. 3).

En los años siguientes, especialmente cuando se acercaban las nuevas elecciones municipales, los alcaldes continuaron desplegando medidas anti-delincuencia. Se desató una verdadera competencia para imponer las modalidades más originales en materia de “seguridad ciudadana”, aunque todas marcadas por el signo común de ser más represivas que preventivas, destacando Joaquín Lavín y Jaime Ravinet (*La Tercera*, 3 de febrero de 1995). Ratificando la existencia de una fuerte demanda “desde abajo” para una mayor represión contra la delincuencia, las encuestas la seguían ubicando entre las prioridades de la población (*La Segunda*, 27 de junio de 1995, p. 17 y 29 de diciembre de 1995, p. 17 y 10). Así, el tópico de la “seguridad ciudadana” se convirtió en una de las principales muletillas de los primeros años del Chile postdictatorial. Algunos alcaldes, que supieron recoger el clamor por más represión a la delincuencia, crearon un nuevo tipo de liderazgo político “municipal”, que se gestó en buena medida en base a cómo responder a este clamor ciudadano.

La corrupción fue otra temática ciudadana que determinó en parte la manera como se construyeron los perfiles de liderazgo municipal más exitosos. La corrupción irrumpió como un problema no contemplado en la agenda inicial de la transición democrática. Este fenómeno se asoció a un amplio universo de acciones en donde recursos públicos fueron utilizados en beneficio personal, de familiares, de empresas o definitivamente mal gastados. Las municipalidades fueron un foco en donde particularmente se desarrollaron casos de este tipo (*La Segunda*, 12 de marzo de 1993, p. 14). El repudio generalizado que generó la corrupción de algunos funcionarios públicos, incluido alcaldes y concejales, obligó a generar un tipo de liderazgo que enfatizara la exclusión de estas malas prácticas. Un estilo que enfatizó la probidad en el sentido de “eficiencia”, una especie de gerente que sabía administrar los recursos municipales. Concientes que las encuestas mostraban un alto nivel de rechazo a los alcaldes vinculados a casos de corrupción,

unido a que la propia legislación lo permitía, el perfil del cargo se volvió cada vez más ejecutivo, “resultadista”, que exigía hechos visibles para que la población no asociara bajo perfil con malas prácticas o tráfico de influencia.

Por este motivo, la corrupción fue un factor fundamental para acentuar el desprestigio de la clase política y por ende, la despolitización de la ciudadanía. Asimismo, también fue fundamental en el desarrollo de lo que bajo la gestión de Lavín y sus seguidores a lo largo del país, se denominó el “cosismo”, a saber, hacer “cosas concretas que realmente le interesan a la gente”, como repetía incesantemente el alcalde de Las Condes. Así, el habitante común y corriente del país, aunque crecientemente despreocupado de cuestiones pertenecientes a la “alta política”, si presionaba a sus líderes locales exigiéndole gestiones afín a sus preocupaciones.

Desde 1993, cuando se dieron a conocer los primeros casos de corrupción, las denuncias se multiplicaron. A mediados de 1994, la Contraloría General de la República contabilizaba más de 240 denuncias en solo un año. (*La Segunda*, 5 de mayo de 1994, p. 6). En los años 1995 y 1996, los casos continuaron acumulándose, golpeando especialmente a la Democracia Cristiana. Las encuestas demostraban la caída en picada de la imagen de la clase política ante la ciudadanía (*La Época*, 17 de julio de 1996, p. 14 y *La Segunda*, 26 de julio de 1996, p. 42).

De esta manera, la corrupción salpicó con su estela de desprestigio a toda la clase política chilena, y con mayor énfasis a los partidarios del oficialismo, mayoritariamente involucrados en ella. Por ello, la derecha y la UDI en particular, capitalizó este descontento exacerbando su discurso anti partidos políticos. Sin embargo, en 1996, todo alcalde que quisiera tener posibilidades de mantenerse en su cargo, debía preocuparse de mantenerse al margen de la imagen corrupta de muchos de sus colegas. Por ello, el período alcaldicio 1992-1996 debió adaptarse a muchas de las demandas provenientes desde abajo. La tendencia fue una matriz marcadamente populista, pues hizo girar los énfasis de la gestión hacia medidas concretas que la gente exigía, más que en proyectos de largo plazo.

Una vez en sus cargos los alcaldes elegidos en las elecciones de 1992, rápidamente comenzaron a destacar los liderazgos de Lavín y Ravinet. En el caso del primero, construyó un perfil que invertía los papeles tradicionales de los alcaldes chilenos: con un discurso anti-confrontacional, que explícitamente declaraba su nulo interés por el debate político-partidista y con una gestión muy ejecutiva y en terreno, la política chilena comenzó a visualizar una progresiva transformación.

Los alcaldes exitosos del periodo 1992-1996 abandonaron la figura del tribuno ideologizado, que hablaba de un futuro mejor, de proyectos de sociedad y de la lucha por un mundo distinto. Ahora, en tiempos de un país cansado de años de enfrentamientos, con una población que accedía a nuevas posibilidades de consumo, intoxicada por las acusaciones de corrupción de “los políticos”, la ciudadanía exigía resultados concretos en el presente. Junto a las banderas de la lucha contra la delincuencia y la eficiencia en la gestión, Lavín entendió que si bien la gente no le preocupaba la política partidista, si tenía muchas preocupaciones por su entorno inmediato y por la suerte de su vida cotidiana. Lejos de la supuesta pasividad, esta “ciudadanía neoliberal” quería opinar, hacía exigencias y castigó electoralmente a los ediles que no lo entendieron. El dirigente de derecha organizó consultas ciudadanas, llamó a olvidar el pasado, dirigía su comuna desde el territorio. Así, se convirtió en el alcalde más popular del país (*La Segunda* del 11 de mayo de 1993, p. 6).

El protagonismo político de los alcaldes dio un paso hacia su institucionalización con la creación en 1993 de la Asociación Chilena de Municipalidades. Su presidente era Jaime Ravinet, pero contaba con una mesa directiva integrada por concejales y alcaldes de derecha y el oficialismo. La importancia de la Asociación de Municipalidades se relacionó con que reforzó el supuesto carácter “apolítico” de los ediles, al diferenciar su trabajo con el de los “políticos”. En efecto, no debe imputársele a Lavín ser el único impulsor de la despolitización de la sociedad. Más bien, un conjunto de alcaldes se hicieron eco de la demanda de una parte de la ciudadanía. La primera vice-presidenta de la Asociación de Municipalidades, la entonces concejal derechista de La Florida Lily Pérez, sintetizaba políticamente esta opiniones. Según ella, el principal potencial de las municipalidades eran que “estaban más cerca de las personas” que el gobierno central y que existía en su interior “un ánimo municipalista más que político”. Esto los constituía en un poderoso nuevo centro de poder político, económico y social: “Somos el poder municipal” (*La Tercera*, 28 de enero de 1995. Suplemento “Publi-Reportajes”, p. 3).

Tal como lo señalaba Lily Pérez, el municipio se comenzaba a vislumbrar como un trampolín para “la nueva política” en Chile y plataforma para posicionarse como posibles candidatos a la presidencia del país. En base a focalizar su atención en las “cosas simples” (Lavín), los municipios se convirtieron en uno de los centros de gravedad de la nueva democracia chilena. Pero para ello, debieron hacerse cargo de la exigente demanda ciudadana “desde abajo”.

2 Las campañas municipales de 1992 y 1996: La “lavinización” de la política en Chile

La comparación de las dos primeras campañas para elegir alcaldes y concejales luego del retorno de la democracia, reflejan la evolución de los contenidos y énfasis que adquirió la política chilena en ese período. En 1992 las temáticas programáticas de la Concertación y el Partido Comunista, estaban basadas en parte en la retórica democratizadora que había guiado la lucha contra la dictadura. Cuatro años más tarde, los tópicos cambiaron, concentrándose en “las cosas simples” de las que hablaba Joaquín Lavín. A la luz de la evolución de los resultados electorales, los alcaldes exitosos, que lograron aumentar su votación, fueron aquellos que se ajustaron de manera más fiel al modelo de Lavín. Por este motivo, se puede afirmar que de 1992 a 1996, el país transitó por un proceso de “lavinización” de numerosos candidatos, alcaldes y concejales electos.

En la campaña de 1992, los principales partidos de la Concertación se enfocaron en la necesidad de respaldar al gobierno, el que contaba con un amplio y sólido apoyo ciudadano. La estrategia electoral oficialista presentó la elección municipal como la continuación de la “batalla por la democracia” de las parlamentarias y presidenciales de 1989, con un fuerte contenido político. La presentó como el momento de llevar la democracia a los gobiernos locales y denunció a la derecha por su falta de vocación democrática. Los partidos del oficialismo se sumaron a estrategia (*La Tercera*, 1º de abril de 1992, p. 8).

Durante el año 1992, la derecha vivía un momento político adverso, plagado de pugnas internas. Materias tales como la evaluación de la herencia de la dictadura, las reformas a la Constitución de 1980, la figura del general Pinochet y las rencillas entre sus caudillos, impedían que apareciera como un bloque opositor consolidado. En este contexto, los contenidos de campaña municipal manifestaron esas diferencias. Renovación Nacional desplegó una propuesta de corte tecnocrático, de clásica inspiración liberal, que no renovaba el tradicional discurso de la derecha chilena (*La Nación*, 21 de febrero de 1992, p. 12).

La UDI, por su parte, enunciaba las primeras ideas que luego serían ampliamente desarrolladas en la práctica por Joaquín Lavín. Según un documento interno, el enfoque de la campaña sería “técnico, no político. La gente quiere solución a sus problemas, esto implica que la discusión debe ser: ‘quién soluciona mejor los problemas de la comuna’. ‘Estamos en democracia ya, todos somos igual de democráticos, la

discusión no puede volver a ser democracia versus autoritarismo” (*La Tercera*, 8 de febrero de 1992, p. 10). Es por ello que los candidatos UDI fueron pioneros en plantear como parte de sus programas cuestiones que reflejaban las inquietudes de la “ciudadanía neoliberal”, como la delincuencia y la seguridad ciudadana. Durante el desarrollo de la campaña, la derecha, a pesar de sus conflictos internos, logró instalar el tema de la delincuencia como protagonista (*La Nación*, 20 de abril de 1992, p. 7).

En 1992 el proceso de “lavinización” de la política ya estaba en curso. Sin embargo, los resultados reflejaron que todavía la oleada pro democratizadora la capitalizaba el oficialismo. Con el 53,3% de la votación, preservaba cómodamente la mayoría electoral en el país. Por su parte, la derecha, a pesar de sus luchas fratricidas y su incapacidad de aparecer con una propuesta alternativa creíble para el país, lograba preservar un tercio del electorado (www.elecciones.gov.cl).

A nivel comunal, las realidades electorales tuvieron matices importantes. En Santiago, Jaime Ravinet, respaldado por su modernizadora gestión municipal, arrasó con el 34,89%. Otro candidato de derecha con una propuesta programática “ciudadana” fue Joaquín Lavín en Las Condes, donde obtuvo un sorprendente 29,51% de los votos. Si bien esa comuna tenía una votación marcadamente clasista a favor de la derecha, Lavín lograba superar su fallida candidatura a diputado de 1989, cuando obtuvo solo el 18,98%. Ahora, con un discurso no confrontacional, se convertía en alcalde y se aprestaba a ser uno de los responsables de un profundo cambio en la política chilena. Lily Pérez, otra de las promotoras de la futura “lavinización” de la política chilena, lograba un meritorio 14,35% en La Florida. En comunas populares también se registraban fenómenos interesantes.

Cuatro años más tarde, el quehacer político en Chile había sufrido un notorio cambio. Los énfasis programáticos, las propuestas y declaraciones de principios de los candidatos a concejales y alcaldes, adoptaron el estilo “lavinista”. De manera entusiasta, incluso los partidarios del gobierno implementaron este estilo, que levantaba las banderas de la “despolitización” como mejor carta de presentación ante el electorado. Como hemos argumentado, esta evolución no debe ser entendida como una mera estrategia o diseño de ingeniería política destinado a manipular a una población pasiva. En alguna medida, su origen respondía a las nuevas preocupaciones ciudadanas. Así, temáticas relativamente ausentes y/o enarbolada por solo algunos candidatos, el año 1996 formaron parte del sentido común de los aspirantes a dirigir

los gobiernos comunales. Seguridad ciudadana, corrupción, eficiencia administrativa, centralidad de las “cosas concretas”, pasó a predominar la agenda programática de los candidatos de las dos coaliciones políticas más importantes del país. La vinculación con temas políticos nacionales, vital en 1992, perdió importancia y dio paso a la nueva agenda. Por este motivo, en tiempos de la segunda elección democrática de jefes comunales, la política chilena mostraba un amplio y transversal proceso de “lavinización”.

El contexto nacional en la que se produjo la elección municipal de 1996, estuvo marcado por ser el último año de crecimiento económico sostenido del país. En 1997 los primeros efectos de la crisis asiática se hicieron sentir, dejando al gobierno de Frei en una difícil situación para los dos años finales de su administración. Por lo tanto, en 1996 el gobierno gozaba de popularidad. Por ende, la Concertación se arrojó bajo la “obra” de sus administraciones para pedir apoyo popular, ofreciendo la continuidad de la estabilidad política y económica que los había caracterizado. Este énfasis acentuaba la crítica a la derecha, aún incapaz de superar sus pugnas internas. En este contexto adverso para los sectores conservadores, se produjo la paradoja que su estrategia de una campaña “despolitizada” fue predominante. Las fuerzas conservadoras fueron capaces de imponer un libreto que le acomodaba y posicionar líderes a nivel nacional a pesar de su permanente estado de guerra interno en el que vivía (*La Época*, 1º de febrero de 1996, p. 14).

Para la campaña de 1996, la UDI diseñó un “manual de imagen corporativa”, con el objetivo de unificar la campaña a lo largo de todo el país. El slogan era “soluciones para todo Chile, soluciones para tu comuna” y definía la campaña como ‘algo simple, sencillo y no ideológico... una invitación a despolitizar el gobierno comunal, para llevarlo al servicio de todos’”. Se declaraba el fin de la era de las diferencias ideológicas y que ahora “las preocupaciones ciudadanas se centran en los problemas reales”. Por este motivo, seguía planteando el documento de la UDI, el gobierno comunal se debía enfocar “hacia las personas y no hacia la política” (*La Segunda* del 5 de agosto de 1996, p. 15). El símbolo de esta manera de hacer política era Joaquín Lavín. Su arrollador triunfo en esta elección lo posicionó como carta presidencial de la derecha.

Por su parte, el oficialismo también despolitizaba su mensaje. En esta línea, Alejandro Foxley, presidente de la DC, planteaba la elección como “una campaña acerca de la vida concreta de la gente”, centrada en “los temas cotidianos que le interesan a la ciudadanía, como

congestión, contaminación, drogadicción y delincuencia” (*La Segunda*, 25 de julio de 1996, p. 15). Por su parte, el Partido Socialista borró de sus símbolos los íconos que recordaban su tradición de izquierda, dando paso a un volantín tricolor. El PPD, que ya había dado señales de vaciar de contenidos políticos sus candidaturas en 1992, no tuvo problemas en reconocer que su estrategia de campaña se basaba en que “la personalidad del candidato sustituye la ideología”. Por este motivo, sus candidatos debían ser “hombres y mujeres con capacidad de gestión”, lo que explicaba el eslogan de campaña: “gente de acción”, acorde al perfil ejecutivo que caracterizaba a la política “lavinizada” (*La Segunda*, 2 de agosto de 1996, p. 27.).

En general, los resultados de las elecciones de 1996 significaron un nuevo gran triunfo para la coalición de gobierno. El 56,13% obtenido representaba un alza de su votación. Pero la derecha también ganó terreno, pues con el 32,47% de los votos, subía alrededor de tres puntos. Estas alzas fueron a costa de fuerzas menores de izquierda y derecha. A nivel comunal, los dos grandes ganadores de la jornada fueron Jaime Ravinet y Joaquín Lavín, quienes sacaron a relucir sus credenciales como posibles presidenciables. El alcalde reelecto de Santiago logró el 39,43%, subiendo cinco puntos su votación. En declaraciones de prensa, un eufórico Ravinet declaraba su disposición a competir en primarias con el socialista Ricardo Lagos. Sin embargo, antes debía ganar el favor de su partido, cuestión que a la largo no lograría. Por su parte, el alcalde de Las Condes obtuvo un sorprendente 74,72%, lo que implicó que, a diferencia de su colega de Santiago, fuera ese mismo día proclamado como presidenciable por la UDI. Estos resultados reafirmaron la fórmula despolitizadora de Lavín, que le había permitido crecer muy por sobre el promedio de su sector (*La Segunda*, 28 de octubre de 1996, p. 11).

Tal como declaraba Lavín, su caso se reprodujo a menor escala en otras comunas. Un ejemplo de esta situación la ofrece la comuna de Huechuraba. Su territorio hasta 1991 formaba parte de una unidad administrativa mayor (Conchalí), pero ese año fue convertida en comuna. De fuerte tradición izquierdista, había sido un importante foco de protestas contra la dictadura militar, con numerosas juntas de vecinos democratizadas durante ese período. Esto se expresó en las votaciones de fines de la década de los ochenta, donde los opositores a la dictadura de Pinochet obtuvieron votaciones superiores al 60%. Más tarde, bajo el gobierno democrático, la conformación como una unidad administrativa autónoma fue recibida con algarabía por sus habitantes, que

vieron cumplir un viejo anhelo gracias al nuevo gobierno (Garcés, 1997, p. 157).

En el momento de su fundación en 1991, contaba con casi 80 mil habitantes, de la cuales 15 mil vivían en la extrema pobreza. (*La Tercera*, 15 de agosto de 1991, p. 6). El gobierno designó como alcaldesa a la PPD Sofia Prats Cuthbert, nombre muy simbólico para las fuerzas democráticas. Sus padres, el general Carlos Prats y Sofia Cuthbert, habían sido asesinados en 1974 en Buenos Aires por la policía secreta de la dictadura, en uno de los más connotados casos de terrorismo de estado perpetrado por el régimen, dada la condición de ex Comandante en Jefe del ejército del uniformado. De esta manera, para el oficialismo, Huechuraba se convertía en un símbolo de la nueva alborada democrática. Los perseguidos de ayer, ahora ejercían el poder y además, se abocaban a la tarea de enmendar la profunda desigualdad social heredada del régimen militar.

En este contexto, la elección municipal de 1992 fue un mero trámite. La lista de la Concertación obtuvo 62,13% y la figura más votada fue la alcaldesa Prats. Con el 35,7% de los votos, validó en las urnas su liderazgo en la comuna. La derecha logró solo un concejal, pues su lista obtuvo el 12,8% de los votos. El concejal electo de la derecha llegó al 2,51% de los votos, lo que revelaba el casi nulo liderazgo de la derecha en la comuna.

Cuatro años después, Sofia Prats encabezó la lista del oficialismo y la única duda que existía era si sería capaz de repetir la alta votación de 1992. En general, los resultados registraron variaciones leves. La Concertación alcanzó el 59,17%, la derecha el 13,51% y el Partido Comunista el 10,18%. Con esto, la derecha conservó un concejal, la joven militante UDI Carolina Plaza. Sin embargo, dentro de la lista ganadora se produjeron movimientos significativos. Prats, con un 27,9%, registró un notorio descenso de adhesión popular, casi ocho puntos porcentuales menos que en 1992. De esta manera, al no registrarse alzas notables en la derecha y el PC (por el contrario, este disminuyó su votación), lo que ocurrió fueron básicamente dos hechos. Primero, que se fragmentaron los liderazgos políticos internos en el oficialismo, pues todos los candidatos subieron su votación, pero sin alcanzar a amagar a Prats. Segundo, la deslegitimación de la política a nivel nacional golpeó la popularidad de la alcaldesa de Huechuraba. Desde el punto de vista neto, en 1996 votaron 3.169 personas menos que en 1992. Además, el número de votos nulos subió del 5,8% al 8,5%, por sobre el promedio nacional, que en 1996 alcanzó el 7,9%. Ambos indicadores revelaban

una forma de descontento hacia la gestión de la edil, pero que al no visualizar un liderazgo alternativo, se restaron de inclinar su apoyo hacia algún candidato. La sangría de apoyo popular llegó a su punto álgido cuatro años más tarde, cuando al otrora poderosa alcaldesa, con solo el 20% de los votos, fue derrotada por la joven UDI Carolina Plaza (SERVEL).

Como decíamos más arriba, para entender cómo se produjo este relativamente acelerado cambio de lealtades políticas, es necesario combinar elementos de nivel local como nacional. En el caso de este artículo, que pretende demostrar la importancia del “clientelismo desde abajo”, en el contexto de una nueva subjetividad ciudadana neoliberalizada y despolitizada, nos parece que una de las explicaciones de la pérdida de popularidad de Sofia Prats en Huechuraba, se relacionó con una forma de gestión municipal que no fue capaz de sintonizar con un segmento significativo de la población.

En efecto, el gobierno consideraba en 1993 que la administración municipal de Huechuraba simbolizaba, en un marco socio-económico adverso (pobreza estructural), una manera “moderna” e innovadora de gobierno local, que estaba “comenzando a superar problemas graves” de los habitantes de la comuna (*La Época*, 20 de marzo de 1993, p. 7). Pero, ¿cuál era la percepción de las personas? Las elecciones constituyen un indicador cuantitativo del progresivo descontento de un sector de los habitantes de Huechuraba hacia la alcaldesa Prats. Pero cualitativamente, un texto que reúne entrevistas a pobladores y dirigentes locales de esta comuna, realizadas entre 1993 y 1996, permiten captar la dimensión cualitativa de las percepciones críticas sobre la gestión comunal. Las preocupaciones se centraban en los tradicionales problemas de vivienda (escaso número, mala calidad, etc.); la delincuencia juvenil, la falta de policías y el flagelo de la droga eran mencionados como problemas fundamentales (Garcés, 1997).

Por su parte, el rico tejido social que había caracterizado a la comuna durante las décadas pasadas, decayó notablemente a principio de los noventa. De acuerdo a los testimonios de esa época, predominaban organizaciones destinadas a la diversión y sociabilidad (clubes deportivos, centros de madres, etc.). Para resumirlo en pocas palabras, la situación de la participación en Huechuraba durante la década de los noventa era definida como “crítica, ya que el número de población involucrada es mínima”. De esta manera, las voces de los dirigentes locales, que tradicionalmente operan como los interlocutores entre las personas y el municipio, comenzaban a responsabilizar a este

último por su incapacidad para resolver los problemas de la gente (Garcés, 1997).

Así, un municipio conducido por una figura con liderazgo nacional, que contaba con el respaldo popular inicial para desarrollar los programas sociales del gobierno y capitalizar sus resultados, perdía terreno entre sus habitantes. En el caso de Huechuraba, lo que descapitalizó a Prats fue una gestión que no mostraba resultados tangibles. En 1992, en la primera cuenta pública que Sofía Prats hizo como alcaldesa democráticamente elegida, mostraba una gestión preocupada por la atención de problemas estructurales, como educación, salud y vivienda. Solo este último aspecto tiene un efecto más directo sobre la población, pues los dos primeros, dada la complejidades que encierran, necesitan períodos más prolongados para evaluar sus resultados. En el plano del establecimiento de relaciones clientelares, el municipio había conseguido trabajo a 400 cesantes y 556 jóvenes recibieron capacitación. Entregó subsidios y pensiones asistenciales para personas en condiciones de extrema pobreza. Además, financió organizaciones sociales y juntas de vecinos, preparando dirigentes, financiar actividades deportivas y culturales, etc. Con todo, eran el tipo de medidas propias de un municipio, que la población esperaba y que no le daban, necesariamente, un apoyo extra a la alcaldesa. Sin embargo, esta primera cuenta pública no se refería a materias de seguridad ciudadana, problemática que tanto a nivel nacional como local, estaban a la orden del día (I. Municipalidad de Huechuraba. Cuenta Municipal 1992. Abril 1993). En los años siguientes, la propia alcaldesa reconocía su “falta de creatividad” para enfrentar los problemas, el verticalismo en la toma de decisiones y la necesidad de desarrollar la participación ciudadana. (I. Municipalidad de Huechuraba. Cuenta Municipal 1994 y 1995).

De esta manera, hacia 1996, la gestión de Sofía Prats se anotaba importantes logros, tales como entregar un balance de gastos municipales equilibrado, sin denuncias de corrupción, desarrollando importantes obras de infraestructura en educación y salud, viviendas sociales y el fomento a la participación social. Sin embargo, esto también dejaba de manifiesto sus insuficiencias, relacionadas con una gestión alejada de la “lavinización” de la política, popularizada a través de los estilos gerenciales y ejecutivos de Lavín y Ravinet. Los énfasis en programas comunitarios, el fomento de la participación a través de las juntas de vecinos, las nulas iniciativas en políticas de seguridad ciudadana y ser reacios a medidas efectistas, entre otras cosas, le pasaron la cuenta a la alcaldesa Prats.

Conclusiones

El retorno a la democracia en Chile, luego del prolongado régimen autoritario del general Pinochet, fue un proceso cuya complejidad quiso ocultarse tras la autocomplaciente mirada oficial que calificó a este proceso como “modelo”. El comportamiento deliberante de las fuerzas armadas, los intentos de hacer “borrón y cuenta nueva” en materia de justicia en los casos de violación a los derechos humanos ocurrido bajo la dictadura, la continuidad del modelo económico neoliberal y las restricciones impuestas al proceso de profundización democrática, por medio de la permanencia de la institucionalidad de la dictadura, se justificaban apelando a la existencia de “paz social” y los buenos resultados macroeconómicos del modelo.

Sin embargo, mientras que “por arriba” la clase política apostaba a los consensos y los acuerdos, por “abajo” se generaba un nuevo tipo de relación con la ciudadanía. Calificada de “apática” y “pasiva” en ese entonces, no se terminaba de calibrar la profundidad del cambio cultural que vivía el país. En efecto, buena parte de los chilenos habían dejado atrás la militancia política previa al golpe de estado de 1973 y los avatares de la lucha por el retorno a la democracia de la década de 1980. Más de una década de experimentar el neoliberalismo cotidianamente, a nivel celular, viró la óptica de la política. La ciudadanía entendida solamente como interesada en la cosa pública, no daba cuenta de la privatización de las preocupaciones de la población. La despolitización de la sociedad, agobiada por años de represión y resocializada por el neoliberalismo, impuso un drástico cambio a la política chilena, que fue entendido por algunos dirigentes políticos, especialmente ligados al mundo de los gobiernos comunales.

Los municipios, fortalecidos como entes de poder durante la dictadura, tributarios de un modelo de “participación” que no implicaba poner en riesgo al modelo neoliberal, fueron uno de los primeros órganos estatales en comenzar a cambiar su modalidad de gestión. Dependientes del respaldo popular para asegurar la continuidad de sus mandatos, numerosos alcaldes, de derecha y de la Concertación, amoldaron sus prácticas y discursos políticos a las nuevas demandas de lo que se ha denominado como el “sujeto neoliberal”. La despolitización de la población no fue sinónimo de pasividad o desinterés por los problemas que aquejaban al país. Es en este punto en donde nos parece que, desde el punto teórico, las modalidades tradicionales de entender el clientelismo político, no permiten explicar la evolución del comportamiento político

de una sociedad, como la chilena, con tradición de organizaciones sociales fuertes y con un incipiente desarrollo democrático. Es más, un período post autoritario, como el que vivía Chile en la década de los noventa, no era un escenario propicio para imponer agendas políticas alejadas de los intereses de las personas. Como lo hemos demostrado en este artículo, un clientelismo “desde abajo” operó en la arena política chilena, transformándola y conduciéndola por caminos que los actores políticos dominantes – las dos grandes coaliciones – no tenían previamente estipulados.

La debilitada presencia de conflictos sociales “clásicos”, o sea, aquellos conducidos por sindicatos u otras organizaciones político-sociales, no significó que la sociedad civil chilena fuera un campo exento de problemas y fácilmente manipulable. Las alzas y caídas de popularidad de los alcaldes, eran una muestra de que cada gobierno comunal era distinto y exigía capacidad de responder a las problemáticas locales. En este sentido, tal como ha sido investigado en otras latitudes, la relación clientelar entre el líder y el ciudadano, no respondía solo a un momento determinado (las campañas políticas), sino que necesitaban reactualizarse cotidianamente. Los problemas y necesidades de la gente tienen ese carácter, por lo que las gestiones municipales exitosas fueron aquellas que se plantearon cercanas a esas realidades, ejecutivas y con alto poder de resolución de problemas sobre las “cosas simples”. Así, despolitización mediante, en la década de los noventa el perfilamiento particular que lograra cada edil, era clave para determinar su futuro político.

Desde el punto vista político, las gestiones municipales que obtuvieron respaldo popular durante el primer periodo de administraciones municipales democráticamente elegidas, tuvieron en común que se distanciaron de la “política” (en el sentido de lo partidista) y adaptaron sus programas a las necesidades que estaba demandando la población. El caso del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín se convirtió en paradigmático, pues resumía las características del nuevo tipo de liderazgo que, a nivel municipal, las personas comenzaron a respaldar: “cercano”, “innovador”, despolitizado y “eficiente” (léase ejecutivo o “realizador”). Sin embargo, este fenómeno político estuvo lejos de centrarse solo en el alcalde Lavín o en la derecha, pues ediles oficialistas, como Jaime Ravinet, reprodujeron en parte algunas de estas prácticas. En los municipios que se ciñeron a las labores que normalmente se espera que cumplan, sin agregar tópicos que estaban en la agenda pública (especialmente la llamada “seguridad ciudadana” o “combate contra la delincuencia”), vieron estancado o declinar el respaldo popular. Demostrando que esto afectaba electoralmente a

sectores que se consideraban trincheras insalvables para la derecha, resultan ejemplificador lo que ocurrió en comunas populares como Huechuraba. En un sector en donde la derecha se empinaba apenas sobre el 10% de los votos, los primeros cuatro años de mandato de la alcaldesa del PPD no ratificaron su liderazgo. Por el contrario, significaron una abrupta caída de apoyo a su gestión, tendencia que continuaría los años siguientes. El examen de su labor al frente del municipio, revela ausencia de los tópicos ciudadanos del momento. La sola administración de las labores propias de las municipalidades, ya no eran suficiente para mantener las lealtades políticas de los chilenos.

En síntesis, los municipios fueron el primer espacio institucional que acusó los cambios de los intereses e inclinaciones políticas de la sociedad chilena. Fue en ellos en donde se comenzó a vislumbrar que la “lavinización” de la política fue una necesidad que se impuso en la práctica, imponiendo nuevos estilos y formas de relacionarse con la ciudadanía.

Referências

- ÁGUILA, Marisol. Democracia, sociedad civil y nuevos movimientos sociales. In: GARCÉS, Mario et al. *Democracia y ciudadanía en el Mercosur*. Lom: Unión Europea, 2006.
- BANÉNGAS, Richard. Clientelismo electoral y subjetivación política en África. Reflexiones a partir del caso de Benín. In: *Desacatos*, n. 36, mayo-agosto 2011.
- BAROZET, Emmanuelle. Movilización de recursos y redes sociales en los neopopulismos: hipótesis de trabajo para el caso chileno. In: *Revista de Ciencia Política*, v. XXIII, n. 1, 2003.
- CAMPERO, Guillermo. Más allá de la participación: la buena sociedad y la participación. In: CORTAZAR, René; VIAL, Joaquín (Ed.). *Construyendo opciones*. Dolmen: CIEPLAN, 1998.
- CASTILLO, Adolfo. La deliberación ciudadana y la experiencia del presupuesto participativo en San Joaquín. In: FUENTES, Claudio et al. *Desafíos democráticos*. Lom, 2006.
- COMBES, Hélène. ¿Dónde estamos con el estudio del clientelismo? In: *Desacatos*, n. 36, mayo-agosto 2011.
- DE LA MAZA, Gonzalo. *Tan lejos, tan cerca*. Políticas públicas y sociedad civil en Chile. Lom, 2009.
- GARCÉS, Mario et al. *Historia de la comuna de Huechuraba*. Memoria y oralidad popular urbana. ECO, 1997.
- GARRETÓN, Manuel Antonio. *Del postpinochetismo a la sociedad democrática*. Debate, 2007.
- GÓMEZ, Juan Carlos. *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile: 1990-2010)*. Editorial ARCIS-CLACSO, 2010.

- GUERRA, Carlos. *Nueva estrategia neoliberal: la participación ciudadana en Chile*. UNAM, 1997.
- HUNEEUS, Carlos. Los cambios institucionales al sistema económico durante la transición a la democracia en Chile. Del neoliberalismo a la economía social de mercado. *Revista de Ciencia Política*, v. 20, n. 2, 2000.
- JOIGNANT, Alfredo. La democracia de la indiferencia. Despolitización, desencanto y malestar en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. In: MUÑOZ, Oscar; STEFONI, Carolina (Coord.). *El periodo del Presidente Frei Ruiz-Tagle*. Editorial Universitaria, 2003.
- LECHNER, Norbert. *Las sombras del mañana*. Lom, 2002.
- MELLER, Patricio. Pobreza y distribución del ingreso en Chile (década de los noventa). In: DRAKE, Paul; JAKSIC, Iván. *El modelo chileno*. Democracia y desarrollo en los noventa. Lom, 1998.
- MOULIAN, Tomás. *Chile actual*. Anatomía de un mito. Lom, 1997.
- MOULIAN, Tomás. *El consumo me consume*. Lom, 1998.
- MOULIAN, Tomás. *De la política letrada a la política analfabeta*. La crisis de la política en el Chile actual y el “lavinismo”. Lom, 2004.
- MUÑOZ GOMÁ, Oscar. *El modelo económico de la Concertación. 1990-2005*. ¿Reformas o cambio? Catalonia: FLACSO, 2007.
- OTANO, Rafael. *Crónica de la transición*. Editorial Planeta, 1995.
- OVIDEO, Enrique. Violencia delictual y ciudad. Evolución histórica de hurtos y robos en siete ciudades y análisis de sus distribución intercomunal en el Gran Santiago. In: *Proposiciones*, n. 22, 1993.
- PORTALES, Felipe. *Chile, una democracia tutelada*. Sudamericana, 2000.
- POZO, Hernán. Municipio y acción social: análisis de cuatro experiencias. *Documento de Trabajo FLACSO*, n. 436, 1989.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. *Desarrollo Humano en Chile 1996*. Septiembre de 1996.
- RACZINSKY, Dagmar; SERRANO, Claudia. Descentralización y gobierno local: situación de algunos municipios en Santiago. In: *EURE*, v. XIV, n. 41, 1987.
- RACZINSKY, Dagmar; SERRANO, Claudia. Descentralización y planificación local: la experiencia en las comunas pobres de Santiago. *CIEPLAN*, Notas Técnicas, n. 108, 1988.
- RIQUELME, Alfredo. ¿Quiénes y por qué ‘no están ni ahí’? Marginación y/o automarginación en la democracia transicional. Chile. 1988-1997. In: DRAKE, Paul; JAKSIC, Iván. *El modelo chileno*. Democracia y desarrollo en los noventa. Lom, 1998.
- VALDIVIA, Verónica. El Santiago de Ravinet. Rescate municipal y consolidación del proyecto dictatorial. *Historia*, n. 46, 2012.
- VALDIVIA, Verónica et al. *La alcaldización de la política*. Lom Ediciones, 2012.
- VALENZUELA, Arturo. *El quiebre de la democracia en Chile*. FLACSO, 1989.